

**A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID**

**Loreto Arenillas Gómez**, diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la **PROPOSICIÓN NO DE LEY** que se acompaña, para su debate ante el Pleno de la Asamblea.

Madrid, 28 de septiembre de 2022



Mónica García Gómez

Portavoz



Loreto Arenillas Gómez

Diputada

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es prácticamente imposible en la sanidad pública en nuestra comunidad dado que el servicio no está habilitado en ninguno de nuestros hospitales, ni centros de salud. Si una mujer quiere realizar una interrupción voluntaria del embarazo tendrá que hacerlo a través de las clínicas privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid. Así lo manifestaba también una sentencia del Defensor del Pueblo en la que nos hacía conocedores de que el 100% de los abortos se habían realizado en la sanidad privada durante 2020. Esto genera que las mujeres no podamos abortar de manera libre, segura y en la pública como es nuestro derecho.

A la par, nos encontramos con una situación gravísima en las clínicas privadas: el 30% de las mujeres pagan el servicio de abortar y un 70% de las mujeres pagan por realizar abortos terapéuticos. Además del servicio de pago, la Comunidad de Madrid no está cumpliendo la ley y estas clínicas no cuentan con espacios de seguridad que protejan a las mujeres de las concentraciones en las puertas destinadas a hostigar a quienes quieren ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, podemos afirmar que estamos siendo espectadores y espectadoras de una denegación del acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid, lo que parece indicar un abuso que entra en colisión directa con el derecho a la vida y la integridad física reconocido por el artículo 15 de nuestra Constitución.

El Servicio Madrileño de Salud dispone de 38 hospitales en su red hospitalaria y en todos ellos cuenta con los medios personales y materiales para realizar interrupciones del embarazo. Pese a ello, en base a los datos disponibles en los últimos 12 años, el 99,96% de los abortos se han realizado en centros privados.

Estos datos no hacen más que confirmar el indicio por el cual en dicha administración de salud existe una objeción de conciencia colectiva de los facultativos que perjudica a los pacientes y que limita los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y desarrollados por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Asimismo, pone en riesgo el artículo 15 de la Constitución al obligar, ante interrupciones terapéuticas, a tener que acudir a terceros centros, privados, para garantizar la salud de las pacientes.

El anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, supone una ampliación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la eliminación de los obstáculos existentes para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Consideramos, por ello, que esta ley es un avance para las mujeres y la democracia de nuestro país y consideramos que debe ser aplicada inmediatamente en la Comunidad de Madrid para corregir los defectos en esta materia que

se están desarrollando en nuestra región y así garantizar que las mujeres podamos decidir si queremos ser madres o no serlo con garantías.

El aborto es un derecho reconocido mundialmente y además es una cuestión de salud pública. Uno de los indicadores de la ONU para evaluar el índice de desarrollo democrático de los países es el control de los embarazos no deseados, un bajo nivel de embarazos adolescentes, y un acceso garantizado a la salud sexual y reproductiva. Esto supone garantizar educación sexual y reproductiva, dar acceso a métodos para prevenir embarazos, y también pasa por garantizar el aborto en la sanidad pública. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no actúa en ninguna de estas áreas, todas ellas básicas para garantizar los derechos de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Más Madrid propone la siguiente:

## **PROPOSICIÓN NO DE LEY**

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha en un plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública que contenga las siguientes de medidas:

- Garantizar que las mujeres a partir de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
- Crear un Observatorio de los derechos sexuales y reproductivos para garantizar su cumplimiento en la Comunidad de Madrid.
- Crear una mesa de seguimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantice su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid.
- Garantizar el acceso por parte de la población a diversos medios anticonceptivos (anticonceptivos orales, así como el resto de preparados disponibles) financiados por parte del Sistema Nacional de Salud.
- Garantizar mediante las medidas pertinentes que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no obstaculice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la par que se garantiza que dicha interrupción se pueda realizar en centros públicos. Incluir en los Planes de Formación Continuada, programas de formación específica a ginecólogos y ginecólogas de los hospitales públicos madrileños, así como adaptar los departamentos de ginecología y obstetricia de los hospitales de la comunidad de Madrid, para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la Red del Servicio Madrileño de Salud.
- Campañas públicas de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva que incluyan información sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

- Aumentar el número y la localización de los centros de planificación familiar, en colaboración con los organismos locales donde ya se encuentran activos y en coordinación con la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para favorecer la eliminación de listas de espera, el incremento de la accesibilidad y la mejora de los servicios prestados a la población de nuestra región. .